



confederación sindical de comisiones obreras
Secretaría General | Gabinete Económico Confederal
Fernández de la Hoz, 12. 28010 Madrid. Tel.: 917028018

| www.ccoo.es

PRECIOS, RENTAS DEL TRABAJO Y POBREZA

AGOSTO 2021

Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras

14 de septiembre de 2021

La carestía de la luz y la energía perjudica al tejido productivo y a la mayoría de la población, sobre todo a los hogares con menos recursos

La pandemia ha aumentado los hogares sin ingresos de origen laboral que junto con los hogares con menores ingresos sufren en mayor medida el impacto negativo de la subida de bienes básicos (electricidad, gasolina o alimentos), mientras que el ingreso mínimo vital sigue sin llegar a la mayoría, el subsidio extraordinario de desempleo es insuficiente, el SMI sigue congelado en 2021 y se encarece la vivienda. El alza de los precios desborda la subida salarial pactada y es necesario recuperar las cláusulas de salvaguardia salarial para proteger el poder adquisitivo.

El IPC general sube hasta el 3,3% interanual en agosto, cuatro décimas más que el mes anterior. Gran parte de la nueva aceleración de la inflación se explica por la subida de los precios de la electricidad, superior a la de agosto del año pasado. La previsión es que la inflación media de 2021 se sitúe en torno al 2,4% si se mantiene la actual carestía eléctrica hasta final de año. La inflación subyacente –sin energía ni alimentos no elaborados- sube una décima hasta el 0,7% interanual, 2,6 puntos porcentuales menos que el índice general, la diferencia más alta de la serie histórica.

Se puede hablar de una inflación dual en el caso de los hogares con menores ingresos, ya que los bienes y servicios que concentran su cesta de la compra, especialmente alimentación y suministros básicos de la vivienda, se han encarecido desde el inicio de la pandemia. En los últimos años, la electricidad, el gas y otros suministros básicos acumulan subidas muy superiores a la media, erosionando el poder adquisitivo de los hogares.

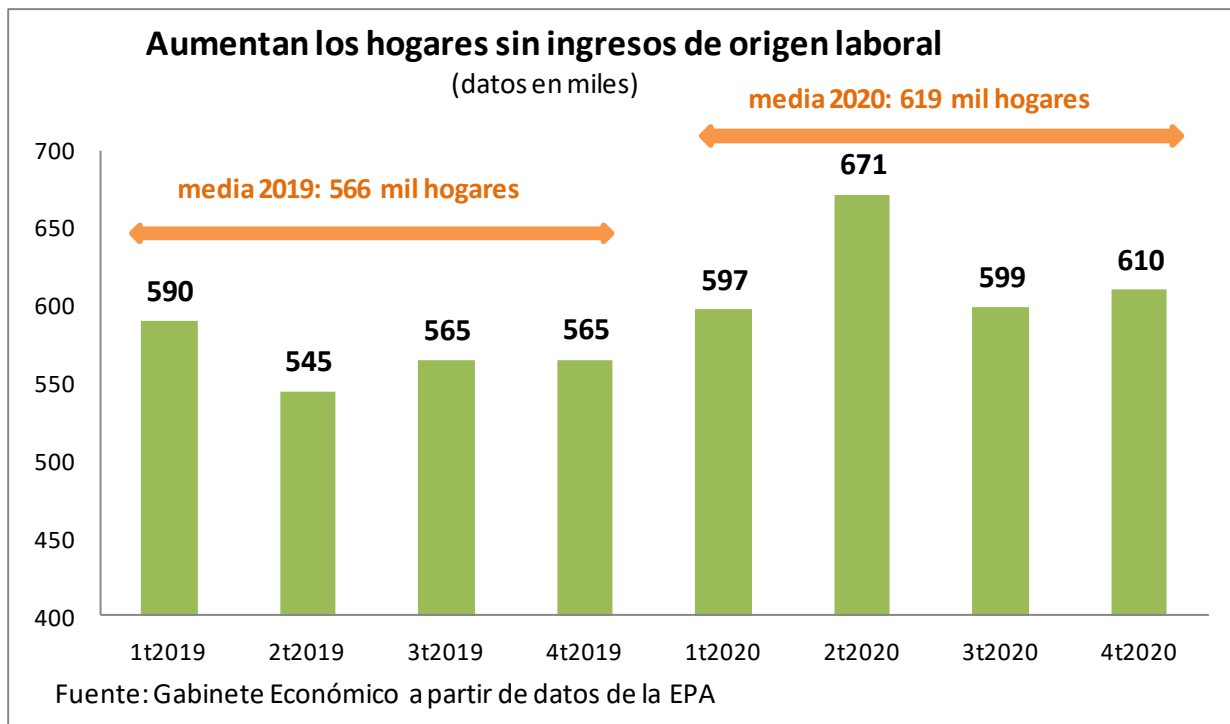
Aumento de los hogares pobres durante la pandemia

La pandemia y la crisis asociada han incrementado las cifras de paro y de hogares sin ingresos de origen laboral (salario, pensión o prestación por desempleo) que es la variable coyuntural que mejor aproxima la pobreza y que proporciona la EPA. En el cuarto trimestre de 2020 el número de hogares sin ingresos laborales se situó en 610 mil. Esta cifra se ha moderado respecto a los máximos del 2t2020, pero es más alta que la que había antes de que estallara la pandemia (ver Gráfico #1) que, a su vez, ya era muy alto, debido a que todavía no se habían recuperado los niveles anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Las ayudas públicas no están llegando a los hogares pobres

Las medidas de protección social extraordinarias adoptadas por el gobierno no solo no han logrado rebajar el alto volumen de hogares pobres que ya existía antes de la pandemia, sino que tampoco han podido evitar su aumento. En particular, el ingreso mínimo vital que inicialmente estaba programado que llegara a 850.000 hogares solo beneficia de momento a 260.000 a finales de mayo, solo un 30,5% de los hogares potenciales un año después de su aprobación, como consecuencia del alto grado de exigencia en la justificación administrativa para conseguirlo, que contrasta con el aligeramiento de trámites burocráticos que el gobierno prepara para hacer llegar los fondos europeos a las empresas.

Gráfico #1



Se encarecen los bienes y servicios imprescindibles para los hogares durante la pandemia

Desde el inicio de la pandemia se observan fuertes aumentos en los precios de bienes y servicios imprescindibles, como los alimentos o en los últimos meses la electricidad, que afectan más a los hogares con menores ingresos por el mayor peso que tienen en su cesta de la compra.

En el último año (agosto 2021/2020) se ha disparado el precio de algunos bienes y servicios:

- La electricidad sube un 35% interanual, los combustibles líquidos para consumo doméstico un 32%, los hidrocarburos licuados (butano, propano) un 21% y el gas natural un 4%.
- La gasolina sube un 21% interanual y el gasóleo un 19%.
- El aceite de oliva se encarece un 25% interanual y un 33% otros aceites comestibles (girasol,...), los refrescos suben un 10%, los zumos un 6%, las frutas frescas o refrigeradas un 5%, los huevos un 4%.
- Los hoteles, hostales y similares se encarecen un 11% interanual (tras la “congelación” de precios de hace un año).
- Los seguros privados de salud se encarecen un 5% anual y los seguros de vivienda un 4%.

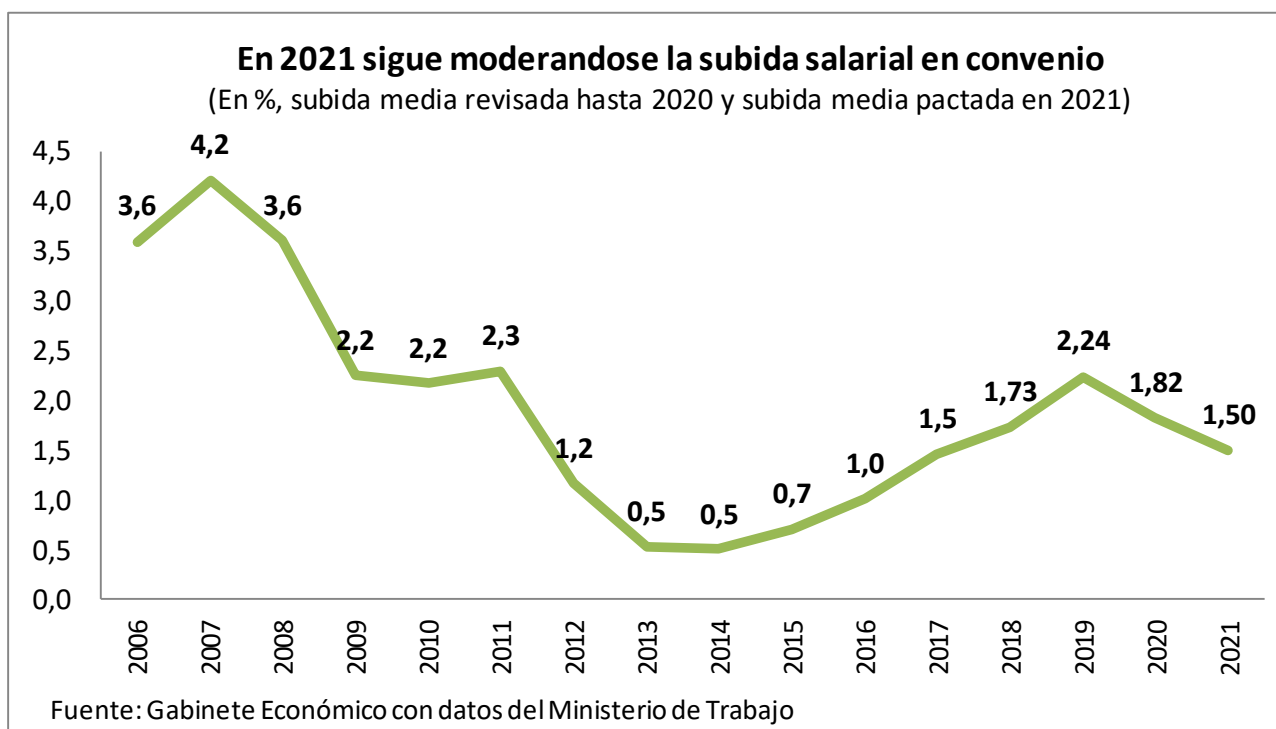
Algunos de estos bienes de servicios se abarataron en los primeros meses de la pandemia, lo que en algunos casos explica parte de la subida interanual que ahora registran. No obstante, si se comparan sus precios con los de febrero de 2020, en todos los casos se mantienen las fuertes subidas de los precios. Hay una presión inflacionista de algunos bienes y servicios derivados de los cambios de consumo durante la pandemia y luego está la fuerte presión inflacionista de la energía, que todavía no se ha filtrado al grueso de bienes y servicios –como refleja la inflación subyacente– pero que terminará haciéndolo de prolongarse en el tiempo la alta carestía energética.

La inflación desborda la subida pactada en convenio y sin clausula de salvaguarda salarial

En agosto de 2021 los convenios colectivos registrados cubren a 5,56 millones de trabajadores/as, una cifra inferior a la de años anteriores a estas alturas del año. La subida salarial media pactada se sitúa en el 1,50%, inferior a la del año pasado (ver gráfico #2) aunque la mayoría de los trabajadores no supera este porcentaje de subida: el 14,8% de los trabajadores/as con convenio tiene pactada una “subida” del 0,00% para 2021, el 42,5% tiene subidas entre el 0,01 y el 1,5%, y solo un 25,9% tiene firmadas subidas por encima del 2%.

El repunte de la inflación en 2021 perjudicará en mayor medida a los sectores más precarios y vulnerables. Hasta agosto, solo el 15,4% de la población asalariada con convenio dispone de clausula de garantía salarial. Es decir, casi el 85% de la población asalariada con convenio colectivo para 2021 no está cubierta frente a tensiones al alza de la inflación que lesionen el poder adquisitivo de sus salarios. Para 2021 se ha aprobado la subida de las pensiones (0,9% las contributivas y 1,8% las no contributivas) y de los empleados públicos (0,9%) pero se ha congelado el SMI, lastrando el poder adquisitivo de los trabajadores con menores salarios y los ingresos de la Seguridad Social.

Gráfico #2



Los ERTE han jugado un papel clave en la gestión de los efectos sociales y económicos de la pandemia impidiendo que, por primera vez en España, durante una crisis el empleo cayera más que el PIB. El proceso de desescalada de la actividad económica paralizada o ralentizada ya se ha realizado en gran medida, y ya se han reincorporado a la actividad laboral el 93% de las personas que llegaron a estar en ERTE en abril de 2020 (3,6 millones). El descenso en la incidencia de la pandemia y el avance de la vacunación han permitido relajar las restricciones, normalizar la

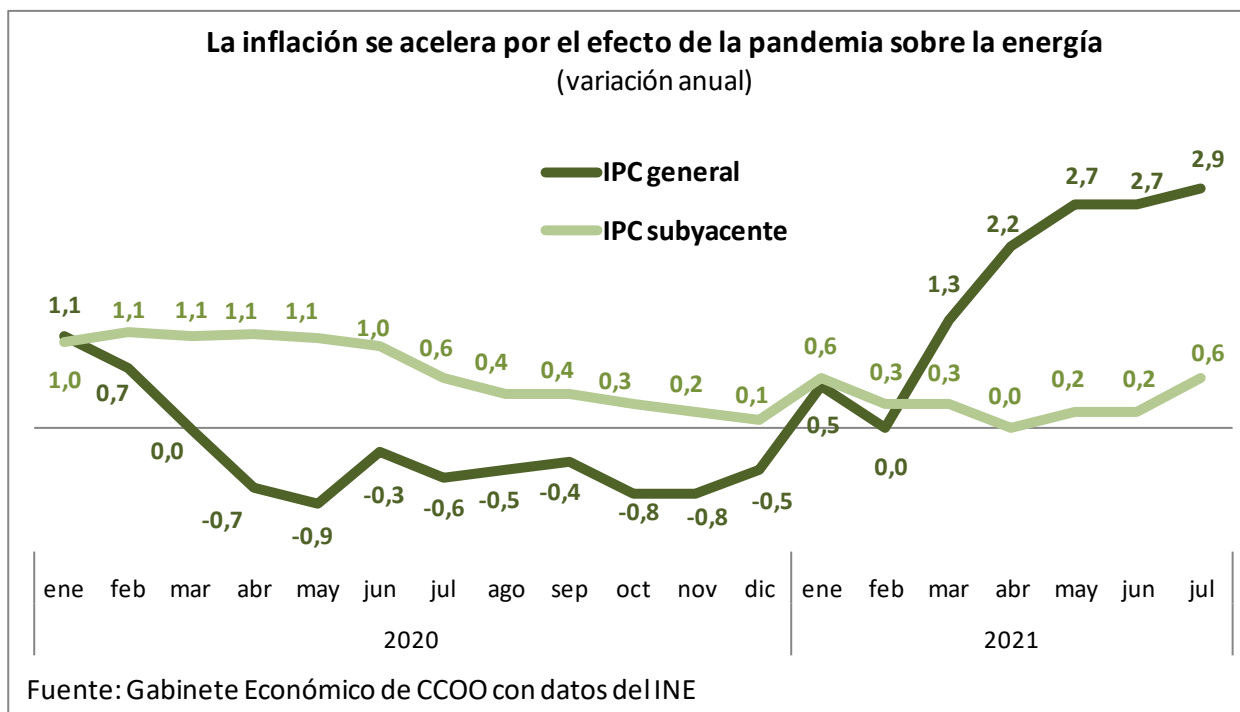
actividad económica y social y reincorporar de nuevo a la actividad laboral a las personas afectadas por ERTE, que se situaban en 263 mil personas a 3 de septiembre de 2021.

CCOO es un fuerte valedor del compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis y para ello es imprescindible mejorar la implementación y gestión de las medidas de protección social aprobadas y que no están llegando a la población que las necesita. La ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y de los fondos europeos destinados a la recuperación deben ser el instrumento clave para consolidar políticas expansivas de protección social e inversión, que consoliden la mejora de nuestro modelo productivo y den respuesta a las necesidades sanitarias y sociales de nuestro país.

En agosto sigue subiendo el IPC por la subida del precio de la electricidad

En agosto de 2021 el IPC general sube su variación anual cuatro décimas hasta el 3,3%, impulsado por el alza del precio de la electricidad este mes superior a las subidas de hace un año. La variación mensual de los precios (agosto sobre julio) registra una subida de 4 décimas, que se explican principalmente por la subida respecto a julio de los precios de la electricidad. La inflación subyacente –sin energía ni alimentos perecederos- sube una décima hasta el 0,7% anual y se sitúa 2,6 puntos porcentuales por debajo del IPC general (ver gráfico #3). Es la mayor diferencia entre ambos indicadores de inflación desde 1986, y refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados.

Gráfico #3



La baja inflación estructural es preocupante y refleja el bajo impulso de la demanda interna provocada por el efecto ahorro y precaución de los hogares, la insuficiente participación de las rentas del trabajo (vía empleo y salarios) en el crecimiento y el lento avance de la inversión – pública y privada- en los años anteriores, a los que se suma el impacto negativo de la pandemia en

el último año y medio. Es necesario proteger el mayor empleo posible, minimizar la pérdida de puestos de trabajo y garantizar que el empleo que se genere en este contexto sea de calidad y garantizando las condiciones de salud e higiene en el trabajo.

En 2021 se está produciendo una aceleración de la inflación tanto en España como en la Eurozona, ligado a la subida de la energía, aunque las expectativas de los agentes económicos sobre la inflación siguen a la baja. En agosto de 2021, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se acelera cuatro décimas hasta el 3,3% anual en España, y se sitúa tres décimas por encima de la variación anual en la Eurozona, que se dispara 8 décimas hasta el 3,0%. La inflación, impulsada por los precios de la electricidad, combustibles y la recuperación económica, supera el objetivo del 2%. No obstante, la necesidad de sostener las economías europeas bajo el impacto de la pandemia e impulsar el esfuerzo de recuperación siguen requiriendo de una importante política monetaria expansiva del BCE y el uso de instrumentos no convencionales de política monetaria, así como aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que supere la austeridad, y de una respuesta colectiva y mancomunada al choque y la crisis generada por la pandemia.

El precio medio de la vivienda en propiedad se sigue encareciendo en España, y acelera su subida en el 2t2021 hasta el 3,3% interanual según el Índice de Precios de la Vivienda del INE (la vivienda usada crece el 2,9% interanual y la vivienda nueva sube el 6,0%). El encarecimiento de la vivienda lastra el poder adquisitivo de los hogares y su capacidad de satisfacer una necesidad básica como es el alojamiento. El precio medio de la vivienda nueva en propiedad se sitúa ya en máximos históricos y el coste de los alquileres suponen una carga excesiva para el 41% de los inquilinos. **Urge avanzar el derecho a una vivienda digna y asequible a través del desarrollo de un parque público de alquiler y la regulación del mercado del alquiler limitando los precios máximos en las zonas tensionadas, entre otras medidas que deben verse plasmadas en la próxima Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.**